

EDITORIAL

Vaca Muerta es un hueso duro de roer. Cada ola de inversiones se piensa como la exitosa, se ansía que esta vez se alcance la escala masiva. Tras los acuerdos impulsados por Mauricio Macri en los últimos meses esa era la meta, al menos. Lo cierto es que si bien hubo anuncios, seguramente no fueron los esperados.

La “normalización del mercado”, flexibilización laboral e incremento de transferencias hacia las empresas parece ser insuficiente. Los inversores, sean extranjeros o nacionales, siempre reclaman más condiciones. El problema ahora sería por la falta de competitividad: que lo que realmente se necesita es mayor inversión pública en infraestructura, dicen unos, que es muy costoso el entramado de corrupción entre empresarios, políticos y sindicalistas nacionales, dicen otros. Algunos llaman la atención de la creciente conflictividad social, que sindicatos estatales y municipios deberían dejar de poner palos en la rueda. El ex gobernador neuquino Jorge Sapag, manifestó que si van a rechazar el fracking, deberían dejar de cobrar sus sueldos o recibir coparticipación, punto en el que incluía también a la provincia de Entre Ríos, que prohibió la técnica en su territorio el 25 de abril.

Como el ex mandatario hizo un llamado al debate y sentimos que parece haber responsabilizado de forma exclusiva a trabajadores y municipios por el descalabro fiscal y productivo neuquino, queríamos hacer un pequeño comentario. En ese diagnóstico no debería olvidarse al MPN, el partido fundado por su familia y que gobierna hace casi sesenta años, como tampoco una centuria de explotación hidrocarburífera en la zona, donde en los últimos 20 años los privados acentuaron el agotamiento del recurso y la degradación ambiental, mientras las distintas gestiones miraban atentamente. Si la provincia en todos estos años no logró financiar y diversificar su matriz productiva, no son los municipios ni los empleados quienes tienen el mayor grado de responsabilidad. Al mismo tiempo, condenar los entramados corruptos nacionales sin responsabilizar a los

ENGLISH

In this ninth edition of the EJES newsletter we point at how the national Government envisages a gas exporting scenario, regardless of the economic and environmental implications it might have in the region. We put the last YPF Board's decisions under the magnifying glass, stressing that the company is departing from energy sovereignty and deepening its rentistic nature. In addition, we stop to look at the increasing labor conflicts unfolding together with the collective agreement negotiations, presented as a way to secure “social peace” while they deregulate labor practices. The high water consumption of unconventional is also examined in this issue. Finally, we wonder what lies behind Schlumberger Oilfield Eastern Ltd, the subsidiary that signed the agreement for shale exploitation in the Bandurria Sur area, adjacent to northern Loma Campana, where YPF-Chevron are exploiting the same type of resource.

actores corporativos en plena globalización neoliberal, también sería un poco reduccionista. Mensajes punitivos sobre los sectores con menor responsabilidad, que tampoco toman en cuenta marcos globales de crisis sistémica, como el agotamiento de recursos, cambio climático y pérdida de biodiversidad. Más allá de esto, el lápiz se afina y ese oscuro objeto de deseo no logra consumarse. Bienvenidos los comentarios y hasta una nueva entrega.